

tante, dicho Juez no es competente. Vista la rectificación hecha por el C. Juan Buendía; el informe del Juez suplente de 1ª instancia de Izamal, á cuya jurisdicción está sujeto Solís; el pedimento fiscal; la sentencia del Juez de Distrito, y Considerando: Que el Juez suplente de 1ª instancia de Izamal, nombrado conforme á la constitución particular del Estado, en el ejercicio de sus funciones legales, es el competente para juzgar y sentenciar á los acusados de delitos cometidos en su jurisdicción; que el delito de que se acusa al solicitante, fué cometido en el Partido judicial de Izamal.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución, se declara: 1º: Que es de confirmarse y se confirma, por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito de Yucatan, que negó el amparo á D. Ramon Solís. 2º: Con fundamento del art. 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se impone á D. Ramon Solís la multa de cien pesos.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revisión, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decreta, ron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 23 de 1874.—*Lic. Emilio Pardo*, oficial mayor interino.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatán por el C. Lic. Eduardo G. Pankhurst, en representación de D. Oscar Lorentzen, D. J. Luis Oliver, Genaro de la Fuente sucesores, D. José, D. Felipe y D. Santiago Villanueva, contra la Administración principal de rentas de la Capital, que les exige el pago del uno por ciento sobre numerario colocado para su exportación, y contra la disposición del artículo 2º del decreto número 92 de la Legislatura del Estado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Al Juzgado de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el 2 del corriente, se presentó el C. Lic. Eduardo Pankhurst, apoderado de los Sres. Oscar Lorentzen, D. J. Luis Oliver, Genaro de la Fuente sucesores y Villanueva Hermanos, quejándose de que la Tesorería general del Estado, les exige el uno por ciento sobre el numerario que iba á exportarse en la conducta que dirigía á Tampico y Veracruz, obligando á sus representados en sus particulares intereses, obligándolos á pedir amparo á la Justicia de la Unión, contra el acto del Tesorero, y el artículo 2º del decreto 92 de la Legislatura del Estado, que invaden la atribución de la autoridad federal, única competente para imponer y autorizar el cobro de derechos sobre exportación, y que promulgada la ley de 4 de Enero del año próximo pasado, solicitando aunque inútilmente la derogación de aquel impuesto, han ocurrido á la justicia federal, sin que hasta la fecha no se obtiene su respectable fallo; y que protestando con una exsacación, que amenaza de muerte la libertad mercantil, y que inspirándose la Legislatura en la ley fundamental del país, pusiese término á un arbitrio que entorpece el tráfi-

co, impide el progreso de la riqueza pública y acaba con los elementos de su producción; y que habiendo clausurado el último período de sus sesiones, el mal que pudo estimarse pasajero amenaza hacerse crónico, y que si la cuestión que se provoca es de notoria gravedad, está ya ampliamente discutida y corroborada con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, confirmatoria de otra del Juzgado de Distrito de Jalisco, que resuelve, que los impuestos sobre numerario y plata pasta con destino al extranjero, cualquiera que sea su denominación, están prohibidos á los Estados por la fracción 1ª del artículo 112 de la Constitución federal de la República, y que habiendo circulado la Jefatura de Hacienda avisos en 31 de Marzo último, no permite dudar que los caudales que ponen en conducta, aunque procedan de una plaza del interior, van con destino al puerto para ser embarcados y que son objeto de tráfico de exportación; y que como el artículo 112 citado, manda que sin consentimiento del Congreso de la Unión, no pueden los Estados establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puerto, ni imponer contribuciones ó derechos de importación ó exportación, el Congreso del Estado no pudo declarar renta del Estado el uno por ciento sobre toda cantidad de numerario de oro y plata que se extraiga de su territorio, y que ningún empleado puede hacerlo efectivo, si para decretarlo y cobrarlo, no se ha obtenido previamente el permiso del Congreso de la Unión; y que aunque es verdad que se ha puesto en práctica una contribución anticonstitucional, pero que parte de los contribuyentes, no ha podido ni puede apelar a sus compromisos en el extranjero, y que el que ha ejercido y ejerce una coacción directa para impedir la extracción, sin que previamente se pague el impuesto á la plata, determinan la urgencia de una resolución que ponga término á los trascendentales perjuicios que sufre el comercio, con infracción del Pacto federal.

Agrega, que el hecho de la Tesorería ge-

neral del Estado, fundándose en el decreto número 92 de la Legislatura del mismo, publicado el 19 de Marzo del año próximo pasado, se exige á sus principales el uno por ciento de extracción sobre las cantidades puestas en conducta, invado así la facultad del congreso de la Unión, consignada en la fracción 9ª del artículo 72, é infracción manifiesta de lo dispuesto en la 1ª parte del artículo 112 de la ley fundamental del país, y concluye pidiendo al Juzgado se sirviera mandar desde luego la ejecución del acto de la Tesorería general; y el artículo 2º del decreto de 19 de Marzo del año próximo pasado, que agrava los derechos y perjudica los intereses de sus representados, y que en seguida se sustancié el recurso de amparo, conforme al capítulo 3º de la ley orgánica, hasta declarar que la Justicia de la Unión, y por lo dispuesto en las fracciones 9ª del artículo 72 y 1ª del 112 de la Constitución general, los ampara y protege contra las leyes y actos del Gobierno del Estado, que invaden la atribución federal al imponer gabelas á la extracción de numerario.

Visto el informe del C. Administrador de rentas, como ejecutor del acto reclamado, en que expone: que siendo una de las rentas del Estado el uno por ciento de que se trata, y que la oficina de su cargo la recaudare de aquellos, su deber de empleado es el exacto cumplimiento de la ley, y que solo bastaría para justificar sus actos; y que es preciso entrar en algunas consideraciones sobre el punto que se debate, para que si lo encuentra fundado se digne tenerlo presente, al pronunciar su respetable fallo, del que depende en gran parte el ser ó no ser de uno de los Estados principales de la Confederación; y que el artículo 2º del decreto de 15 de Marzo del año próximo pasado, que reformó la fracción 2ª del artículo 2º de la ley de Hacienda, expedida el 4 de Enero del mismo año, solo impone para la extracción el uno por ciento sobre toda cantidad de numerario en pastas de

oro ó plata, y que la simple lectura de ese artículo, demuestra que el gravámen mencionado, en nada pugna con la fracción 1ª del artículo 112 de la Constitución general de la República, que prohíbe á los Estados establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puerto, ni imponer contribuciones ó derechos sobre importaciones ó exportaciones, y menos como quiere el apoderado de los quejosos, confundir nuestro idioma, dándole un mismo significado á las palabras *extraccion y exportacion*, y que el Estado grava el numerario y pastas de oro y plata, por pasar por su territorio, sin tomar en cuenta si se quedan al otro lado de su linea divisoria con los demas Estados limítrofes ó se lleven al extranjero, y que tal impuesto á quien se le dá el nombre *anti-constitucional*, y lo es tanto, como gravara los fondos municipales, el ganado que degüella, si viniera de fuera del país alegándose que era una *importacion*, y refiriéndose al escrito dirigido á la Suprema Corte de Justicia, por el eminente jurisconsulto Sr. Vallarta, Gobernador del Estado de Jalisco en defensa del derecho que asiste al Estado de su mando para cobrar un impuesto como el que aquí se cobra, y que deja duda alguna sobre el particular y demuestra que la *exportacion* la constituye el acto de exportar, y no la intencion de hacerlo, pues si un comerciante remite caudales cubiertos con guías de la Jefatura de Hacienda con direccion al extranjero les conviene por alguna transaccion mercantil, no exportarlo, sino dejarlo en una plaza del interior, no puede decirse que el uno por ciento que pagó al Estado, fuera un derecho sobre la exportacion de sus fondos; es indudable que no, y añade que hay otras muchas razones que podrian aducirse en pró de la legitimidad del impuesto tantas veces mencionado, y que sería un agravio á la conocida ilustracion del C. Juez; y que entrar en mas argumentos, para demostrar que el juicio de amparo promovido, se apoya en una falsa interpretacion de la parte 1ª del artículo

112 de la Constitución general, cuyo verdadero sentido se ha puesto en claro desde que el Soberano Congreso Nacional desechó el artículo 19 del arancel de Aduanas marítimas y fronterizas vigente, dejando en libertad á los Estados para gravar las mercancías extranjeras; y que por otra parte, la Carta política de la Nacion, quiere que los Estados que tengan puertos, no impongan á la importacion ó exportacion de los efectos, mas derechos que los que señala el arancel, porque de otra manera no sería posible el comercio extranjero; pero que de esto á que los Estados no puedan gravar los productos que forman su principal riqueza, que en Zacatecas es la plata, ya sea en pasta, ó en numerario, hay una diferencia; concluye haciendo una última indicacion: que las municipalidades se sostienen con sus propios arbitrios, y consisten generalmente en la extraccion de sus producciones naturales, y que hasta hoy nadie les ha negado el derecho que tiene aquella riqueza; y que si mañana fueran tales que hubiera necesidad de exportarlos, no se podría impedir gravarlos apoyándose en la 1ª fraccion del artículo 112 de la Constitución, y qué sería de aquellas entidades políticas, y qué entonces de los Estados y por consecuencia inmediata del régimen federativo bajo el cual está constituida la Nacion, puesto que sin hacienda no hay administracion posible, y suplica al C. Juez se sirva fijarse por un momento en el insondable abismo de males que traería consigo la concesion de un amparo como el de que se trata, no ya por las cantidades que dejara de percibir el Estado, por la falta del uno por ciento, sino por el precedente que se establecería negándole el derecho que tiene para decretar libremente los arbitrios que han de cubrir su presupuesto de gastos.

Por lo expuesto, el Promotor fiscal considerando: que habiendo contradiccion en el decreto de 19 de Marzo de 1873 expedido por la Legislatura del Estado, imponiendo á la extraccion de caudales de numerario

en plata y oro y pastas de oro ó plata, el uno por ciento, con la fracción 1ª del artículo 112 de la Constitución federal de la República; y que por otra parte, habiendo el Congreso Nacional desechado el artículo 19 del arancel de Aduanas marítimas y fronterizas vigente, ha dejado á los Estados la libertad de gravar las mercancías extranjeras, y que siendo el producto del Estado la plata, ha tenido derecho de ponerle un gravámen, no porque se exporte al extranjero, sino por el hecho de sacarla de su territorio; pues aunque los comerciantes remitan sus fondos al extranjero, cubiertos con guías de la Gefatura de Hacienda, suele acontecer, que pasados los límites del Estado, cuando se quedan en los Estados limítrofes, es porque no se ha exportado por alguna transacción imprevista; entonces no puede decirse que lo que pagó al Estado fué por exportación, sino como se ha dicho, por el hecho de salir de su territorio; cree pues, que debe negarse el amparo, por no haber invasión de las facultades del Congreso de la Unión, con el impuesto decretado por la Legislatura del Estado, imponiendo á la extracción de numerario el uno por ciento que motiva este juicio; no obstante, la justificación del Juzgado decretará lo que estime mas arreglado á derecho.

Zacatecas, 16 de Abril de 1874.—
Firmado.—*Jesus M. Licona.*

Es copia. Zacatecas, Mayo 4 de 1874.—
Jesus M. Licona.

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Zacatecas, 11 de Mayo de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Eduardo G. Pankhurst en representación de D. Oscar Lorentzen, D. J. Luis Oliver, Genaro de la Fuente sucesores, D. José, D. Felipe y D. Santiago Villanueva, contra la Administración principal de Rentas de la Capital, que les exige el pago de uno por ciento sobre el numerario colocado

TOMO VI.—PARTE II.

para su exportación en la conducta que con dirección á Tampico y Veracruz, debía salir el día 7 de Abril próximo pasado, y contra la disposición del art. 2º del decreto núm. 92 de la legislatura del Estado, fecha 19 de Marzo del año anterior, por no estar autorizado el Estado de Zacatecas para imponer contribuciones sobre importaciones y exportaciones, invadiéndose las facultades consignadas al Congreso de la Unión en la fracción 9ª del art. 72 de la Constitución general, y con infracción de la fracción 1ª del art. 112 del mismo Código. Vista la suspensión provisional; el informe de la Administración principal de Rentas; el pedimento del C. Promotor fiscal; los alegatos y la citación para sentencia.

Considerando primero: que el referido impuesto de uno por ciento, llamado de extracción, cuando recae en los caudales puestos en conducta con destino al extranjero, á cuyo efecto han pagado ya á la Hacienda federal el cinco por ciento de exportación y obtenido las correspondientes guías con escala ó sin ella, se convierte necesariamente en un verdadero derecho de exportación, que el Estado cobra sin el consentimiento del Congreso de la Unión, como lo requiere la fracción 1ª del art. 112 de la Constitución.

Segundo: que además de esto, la moneda aunque bajo ciertos respectos es una mercancía igual á cualquiera otra, y sujeta á las mismas leyes y principios que todas en su producción y consumo, como lo acreditan las sanas teorías de la ciencia económica, bajo otros, conforme á las leyes fundamentales de país, se considera y debe considerarse como una mercancía especialísima, que por lo mismo debe sujetarse á leyes y condiciones también especiales.

Tercero: que bajo este respecto, la moneda en el régimen de gobierno que tiene adoptado la República, ha estado siempre sujeta en su producción, circulación y extracción ó exportación á las leyes federales, y es conveniente que así se verifique en interés

de toda la República, que se perjudicaría notablemente si á cada uno de los Estados de la Federacion fuera lícito establecer reglas sobre su produccion y exportacion.

Cuarto: que la necesidad de conservar el valor de la moneda, como una mercancía universal indispensable para realizar toda clase de transacciones mercantiles entre los diferentes pueblos de la tierra, al abrigo de alteraciones caprichosas y bajo la influencia de leyes uniformes, ha hecho que esa materia se someta á convenciones especiales entre las naciones, poniéndola bajo la proteccion del derecho internacional.

Quinto: que el gobierno de la República á quien competiría celebrar una convencion de esta especie en los casos que así pareciera útil á los intereses mercantiles de la misma República, no pudiera hacerlo si cada Estado de la Federacion tuviera libertad de gravar la circulacion de la moneda, cualquiera que fuera la forma y el nombre de ese gravamen; que en último análisis, vendria á producir alteraciones en el valor de la misma moneda.

Sesto: que por estas razones la legislatura del Estado de Zacatecas es incompetente para gravar los caudales extraídos fuera de su territorio, con un derecho, cualquiera que sea su denominación y carácter. Por estas consideraciones, y con fundamento de los arts. 72 fraccion 9ª, 112 fraccion 1ª, y lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869, sentenciando definitivamente este juicio, el Juzgado declara:

1º: Que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Oscar Lorentzen, D. J. Luis Oliver, Genaro de la Fuente sucesores, D. José, D. Felipe y D. Santiago Villanueva, contra el acto de la Administracion principal de Rentas de esta Capital, que les exigía el pago del uno por ciento sobre los fondos que debían exportar en la conducta del 7 de Abril próximo pasado, en cumplimiento del decreto de la legislatura del Estado, fecha 19 de Marzo del año anterior, por in-

vadirse en dicha ley las facultades del Congreso de la Union.

2º: Hágase saber; publíquese esta sentencia en el Diario Oficial del Estado; sáquense las copias respectivas para el Semanario Judicial y remítanse los autos en revision á la Suprema Corte de Justicia.

El C. Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó. Doy fé.—*Manuel G. Solana.*—*Luis G. Chavez.*

Es copia que certifico. Zacatecas, Mayo 12 de 1874.—*Luis G. Chavez*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 6 de Junio de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Lic. Eduardo G. Pankhurst, en representacion de D. Oscar Lorentzen, D. Luis Oliver, Genaro de la Fuente sucesores, D. José, D. Felipe y D. Santiago Villanueva, contra la administracion principal de rentas de Zacatecas, que les exige el pago del uno por ciento sobre el numerario colocado para su exportacion en la conducta que con direccion á Tampico y Veracruz debia salir el dia 7 de Abril próximo pasado, y contra la disposicion del artículo 2º del decreto número 92 de la Legislatura, de fecha 19 de Marzo del año anterior, por no estar autorizado el Estado de Zacatecas para imponer contribuciones sobre importaciones y exportaciones, invadiéndose las facultades consignadas al Congreso de la Union en la fraccion 9ª del artículo 72 de la Constitucion federal de la República, infringiendo la fraccion 1ª del artículo 112 del mismo Código. Visto el informe de la administracion principal de rentas; el pedimento del C. Promotor fiscal y la sentencia del Juez de Distrito.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion, se declara: que es de confirmarse y se confirma por sus propios

legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito de Zacatecas que concedió el amparo á los quejosos.

Devuélvase estas actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, y diciéndole respecto del incidente sobre la multa impuesta á los solicitantes por infraccion de la ley de papel sellado, que esta Corte no se considera autorizada para resolverlo de una manera definitiva en Tribunal pleno, y que en consecuencia, obre conforme á derecho, bajo su responsabilidad.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio María Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto de 1874.—*Enrique Landa.*

CIVIL.

Autos promovidos por D. Domingo Villaverde y Lic. D. Rafael Herrera, ambos de México, sobre denuncia de un capital.

Sentencia del O. Juez de Distrito.

México, Setiembre 13 de 1872.—Vistos, en artículo: Considerando, que de la declaracion del Sr. D. Joaquin Primo de Rivera de fojas 8 vuelta, aparece que obra en su poder el testamento de D^a Felipa Ordáz de Corbera, y que estaba conforme con entregarlo, lo que ofreció hacer y no ha verificado, á pesar de las diversas prevenciones que al efecto se han dictado por el Juzgado. Considerando: que segun declaracion

del defensor fiscal de fojas 7, los autos relativos de la testamentaria de D. Antonio Corbera y D^a Felipa Ordáz de Corbera, obran en poder del Lic. D. Joaquin Primo de Rivera; autos que por su naturaleza, deben existir en el archivo correspondiente; que siendo indudable el derecho del fisco para solicitar de los archivos los datos que necesite, no se enerva este con mayoría de razon, por que esos datos obren indebidamente en poder de particulares. Considerando: que no consta esten terminadas las testamentarias de que se trata, y aun estándolo, la responsabilidad de ellas á los pagos é impuestos que decretan las leyes y obligaciones que reporten los bienes, no por eso terminan, sino que pasan á los representantes legítimos de los derechos, á percibir los capitales de los bienes responsables, y exigirlos de sus administradores los dueños; que en el presente caso, el representante de los derechos al capital denunciado puede serlo el fisco, y á reserva de determinar en lo principal de la denuncia para hacerlo, es indispensable tener á la vista los autos en cuestion.

Por lo expuesto, prevengase al Lic. D. Joaquin Primo de Rivera, entregue en este Juzgado dentro de tercero, dia los autos de las testamentarias de D. Antonio Corbera y D^a Felipa Ordáz de Corbera; apercibido de procederse á lo que haya lugar en derecho si no cumple.

Hágase saber; lo provoyó y firmó el C. Juez.—*Doy fé.*—*José A. Bucheli.*—*Joaquin Sanchez Gonzalez*, secretario.

Pedimento del C. Promotor fiscal del Tribunal de Circuito.

El fiscal dice; que del documento fojas 2 del expediente, aparece que los CC. Rafael Herrera y Domingo Villaverde, denunciaron ante el ministerio como vacantes, los bienes pertenecientes á D. Manuel Corbera que falleció, y despues todos sus herederos